

Constitucion general de la República, se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma en todas sus partes, la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Zacatecas el 29 de Mayo próximo pasado, que declara: "La Justicia de la Union ampara y protege al C. Dionisio Guzman, contra la providencia que lo retiene como soldado en el Batallon número 13 de linea, y contra la que se intentó el presente recurso."—Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Petro Ogazon.—José María Lozano.—José M. Arteaga.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeta y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman. L. Velasquez.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, Julio 17 de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Jalisco por el C. Ramon Miravete, contra una orden del juez segundo de lo civil de Guadalajara, por violacion de garantía.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez:

El promotor fiscal dice: Habiendo obtenido el Sr. D. Refugio Diaz, mediante el otorgamiento de la fianza respectiva y demas

TOMO IV.—PARTE II.

requisitos legales, que el gobierno del Estado lo autorizara para buscar un tesoro antiguo en el ex-convento de Santo Domingo, D. Ramon Miravete en su calidad de encargado y poseedor de la finca que pertenece á D. Benito Gomez Farias, impidió que Diaz ejecutara las obras necesarias para la invencion del tesoro, y por su parte se puso á hacer escavaciones, con el ánimo manifesto de suplantar al denunciante. Por tal motivo, este ocurrió al juez segundo de lo civil quien previno á Miravete que suspendiera sus trabajos hasta que se resolviera en el juicio correspondiente lo que fuera de justicia, dando orden á la policía para que hiciera cumplir su determinacion. Contra esa providencia ha pedido amparo D. Ramon Miravete, teméndose como molestado y expropiado de la posesion que tiene á su cargo, sin la previa indemnizacion y demas requisitos legales; apoyado en los artículos diez y seis y veintisiete de la Constitucion.

El juzgado resolvió ya, de conformidad con lo pedido por el suscrito, la no suspension del acto reclamado y á continuacion debe resolver sobre lo principal.

Considerando el promotor que la molestia que se causa al Sr. Miravete en la finca que tiene á su cargo, se funda en el mandamiento escrito de autoridad competente que apoya y motiva su procedimiento en causa legal, segun puede ejecutarse conforme al artículo diez y seis de la Constitucion; que la suspension de trabajos ordenada al Sr. Miravete por el juez segundo de lo civil y las medidas que la policía haya tomado para hacer respetar esa providencia precautoria, solo importan la molestia permitida por el artículo 16 citado y no la ocupacion que priva de la propiedad á que se refiere el artículo veintisiete, y que aun el hecho mismo de que el denunciante de un tesoro, previos los requisitos legales y armado con el permiso ó decreto de autoridad competente, entrará á la propiedad ajena sin consentimiento del propietario y

ejecutará las obras indispensables para la invencion del objeto denunciado, no constituiría un ataque á las garantías consignadas en el artículo veintisiete, sino el ejercicio de un derecho indisputable que á todo hombre asiste para apoderarse de lo que le pertenece aunque se halle dentro de las posesiones de dominio extraño.

Concluye pidiendo: que la justicia federal no ampara ni protege á D. Ramon Miravete contra la providencia de que se queja, dictada por el juez segundo de lo civil.

Guadalajara, Junio 7 de 1873. *A. Camarena.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Junio 21 de 1873.—Vistos: El C. Ramon Miravete, entabló ante este Juzgado, juicio de amparo y proteccion de garantías, exponiendo, que la noche del 29 del mes próximo pasado se le notificó una orden del C. Juez segundo de lo civil de esta Capital, en que se le prohíbe la entrada á la casa en ruinas, situada en el exconvento de Santo Domingo, y de que está en posesion; pidió igualmente la suspension del acto reclamado, que no se le concedió; y sustanciado el juicio, resulta de las diligencias, que con calidad de devolucion remitió el C. Juez segundo; que el C. Refugio Diaz, denunció ante la autoridad política un tesoro oculto en la parte que llama casa el Sr. Miravete, que al denunciante, previa fianza para reparar perjuicios, se le concedió licencia para la escabacion y que no solo se opuso el citado Miravete, sino que por su cuenta empezó los trabajos de escabacion, lo que dió lugar á la providencia dictada por el Juez. Este Juzgado, considerando: Primero: Que por el auto del Juez segundo de lo civil de esta Capital, dictado el 29 del próximo pasado en que se le ordena al Sr. Miravete suspenda sus trabajos de escabacion hasta que se ventile su derecho en juicio, no se ha violado la garantía consignada en el

artículo 16 de la Constitucion general, pues al contrario, el Juez ha observado las prescripciones de dicho artículo. Segundo: Que menos se ha violado por la disposicion del Juez el artículo 27 de la propia Constitucion, por que el auto que dictó en nada altera la propiedad del dueño de la fraccion de la iglesia en que se cree que hay un tesoro. Tercero: Que aun suponiendo que la disposicion judicial de que se trata, importara expropiacion, el amparo pedido por el Sr. Miravete no debía concedérsele, por falta de personalidad, por que como encargado de las ruinas de Santo Domingo no tiene derecho para ejercer los inherentes al propietario.

Por estas consideraciones, y apoyado este Juzgado en la ley de 20 de Enero de 1869, falla con las proposiciones siguientes: Primera: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Ramon Miravete por no haberse violado en su persona las garantías constitucionales de que se hizo mérito en su escrito de fojas primera. Segunda: Notifíquese esta sentencia; publíquese en el periódico oficial del Estado y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.
—*D. I. Trejo.*—*G. J. Gallegos.*

Es copia. Guadalajara, Junio 24 de 1873.
—*G. J. Gallegos.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 16 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 30 de Mayo del corriente año, promovió ante el Juez de Distrito de Guadalajara el C. Ramon Miravete contra una orden del Juez segundo del ramo civil de aquella Ciudad, por la cual se prohíbe la entrada á la casa en ruinas, situada en el ex-convento de Santo Domingo de la cual ha estado en posesion como encargado por el propietario C. Benito Gó-

mez Farias, violándose, segun alega el promovente, las garantías individuales que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución federal. Visto el informe de la autoridad responsable del acto que se reclama, de cuyo documento y justificantes aparece: que denunciado un tesoro en dichas ruinas por el C. Refugio Diaz, y llenado por este los requisitos legales para buscarlo, se previno al quejoso por un auto del Juez á que se refriere, que suspendiera los trabajos de escabacion que él habia emprendido, dejando libre la accion del denunciante, hasta que en caso de resistencia se verificase al juicio respectivo, vigilando la policía el cumplimiento de la suspension prevenida. Visto el pedimento del Promotor Fiscal, sosteniendo la improcedencia legal del recurso intentado, y la sentencia del Juez de Distrito que deniega el amparo, con todas las demas constancias convenientes. Considerando: primero; que el auto reclamado no importa violacion del artículo 16, por que supuesta la cuestion entre Diaz y Miravete sobre la escabacion en busca del tesoro y sobre los incidentes ocurridos, aquel acto ó sea disposicion del Juez ante quien se llevó la cuestion, es de autoridad competente que funda y motiva la causa legal del procedimiento. Segundo; que tampoco hay violacion del artículo 27, por cuanto á que, no se ha dispuesto de la propiedad por el auto citado.—En virtud de las razones anteriores y de conformidad con lo prescrito por la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Guadalajara, pronunciada en esta ciudad á 21 de Junio último, en la cual declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. Ramon Miravete como encargado autorizado del C. Farias, que ha originado el nuevo recurso de amparo.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó en revision acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos correspondientes; publíquese

por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—Jose Arteaga.—Petro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Aza.—Simon Guzmán.—Luis Velasquez.—José García Ramirez.—Enrique Landa.—oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Julio 21 de 1873.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por el C. Fernando Gomez Virgen, contra el acuerdo de la asamblea municipal de aquella ciudad por el que se le destituyó de médico de la municipalidad y administrador de la vacuna.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El promotor fiscal dice: que en 4 del actual se presentó el C. Dr. Fernando Gomez Virgen, por medio del ocurso de la misma fecha exponiendo: que hace cinco años que le fué conferido el nombramiento de médico de esta municipalidad y administrador de la vacuna, cuyo empleo ha desempeñado con todo el esmero y eficacia que le ha sido posible, hasta el dia primero del presente mes, el que el C. Cruz García Rojas, actual gefe político del partido le impuso la pena de privacion ó suspension indefinida de aquel empleo, como consta de la comunicacion número 1; y lo que motivó la aplicacion de esta pena, fué que habiéndolo-